

# ECUADOR **Debate**

## **CONSEJO EDITORIAL**

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga, Fredy Rivera, Jaime Borja Torres, Marco Romero.

## **DIRECTOR**

Francisco Rhon Dávila  
Director Ejecutivo CAAP

## **EDITOR**

Juan Carlos Ribadeneira

## **ECUADOR DEBATE**

Es una publicación periódica del Centro Andino de Acción Popular CAAP, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

## **SUSCRIPCIONES**

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US \$ 18

ECUADOR: S/. 9.000

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US \$ 6

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR S/. 3.000

## **ECUADOR DEBATE**

Apartado Aéreo 17-15-00173-B Quito, Ecuador

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

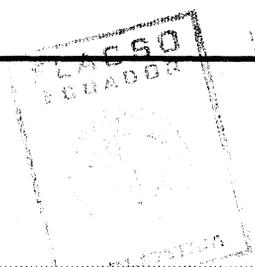
RMTN  
380!

# ECUADOR DEBATE

\$ 5,00

---

Quito-Ecuador, Diciembre de 1992



## EDITORIAL

### COYUNTURA

Los 100 días de Durán-Dahik 9 - 21

DIEGO CORNEJO

Crisis de Legitimidad y Legitimidad de la Crisis: Un Proyecto Social Ausente 23 - 45

JEANNETE SANCHEZ

### TEMA CENTRAL

Impacto del Proceso de Ajuste Económico sobre la Reproducción Social del Ecuador en los años ochenta 49 - 62

SONIA RODAS Y JURGEN SCHULDT

Medidas del 3 de Septiembre / ¿Un Paquetazo Más? 63 - 71

GALO ABRIL OJEDA

El Ajuste Económico del Nuevo Gobierno 73 - 104

MARCO FLORES

Sobre el Nuevo Reajuste Económico: La Lógica Coherencia de una Irracionalidad 105 - 138

ALBERTO ACOSTA

Ajuste y Políticas Sociales en América Latina 139 - 167

ADOLFO FIGUEROA

100-3000

**Japón Cuestiona el Enfoque del Banco Mundial sobre Ajuste Estructural 169 - 179**

FONDO DE COOPERACION ECONOMICA DE ULTRAMAR

## **LIBROS**

### **ANALISIS**

**Tenemos Crisis para Rato 187 - 223**

HUMBERTO CAMPODONICO

**Tecnología y Etica 225 - 234**

JUAN CARLOS RIBADENEIRA

### **DEBATE AGRARIO**

**El Desarrollo Rural en Tiempos de Cólera 237 - 244**

CARLOS BENITO

**Los efectos del Ajuste en la Pequeña Producción Rural (El Caso de Costa Rica) 245 - 252**

WILLIAM REUBEN, JOSE CAZANGA, SERGIO ROBEN

### **CRITICA BIBLIOGRAFICA**

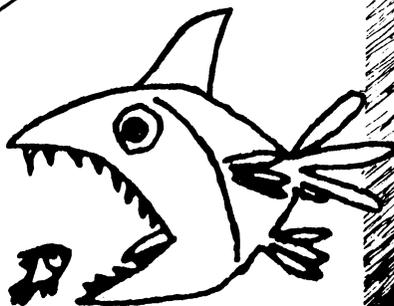
**El "Sentido Común" de Blasco Peñaherrera 253 - 258**

JOSE SANCHEZ-PARGA

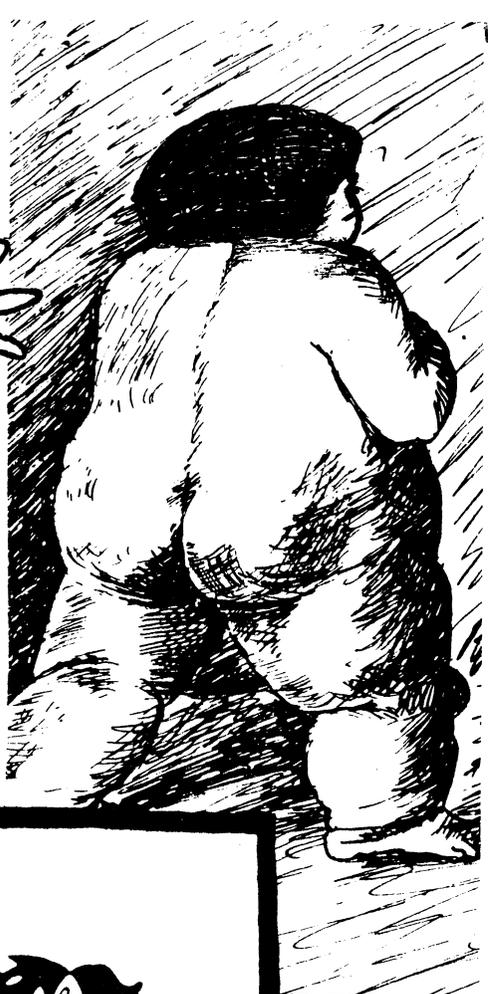
**BIBLIOTECA**



TEMA CENTRAL



# el ajuste estructural



# IMPACTO DEL PROCESO DE AJUSTE ECONOMICO SOBRE LA REPRODUCCION SOCIAL DEL ECUADOR EN LOS AÑOS OCHENTA

Sonia Rodas y Jurgen Schuldt

---

Mientras no se modifique un sector productivo segmentado y desigual y no cambie nuestro Estado concentrador de poder y excluyente en lo político, no es posible el desarrollo en el País.

---

Luego del sustantivo crecimiento económico por habitante de 6% al año registrado en la década de los setenta (1970-79), la economía ecuatoriana se vió inmersa, desde inicios de los años ochenta, en una regresión económica y social que ha adquirido características cada vez más profundas y permanentes, que están desembocando en un proceso de **desestructuración societal** y que

pueden amenazar con el **bloqueo de la reproducción socioeconómica del país**. Con ello se ha ido materializando un consenso respecto a la creciente incapacidad de los sistemas económico y político-institucional del país para asegurar, tanto adecuados estándares de vida a la mayoría de la población, como un proceso social y político de ampliada participación ciudadana.

La mencionada crisis congrega varios fenómenos que se combinaron explosivamente hacia 1980, a saber: el fracaso del patrón de acumulación basado en la industrialización por sustitución de importaciones, el agotamiento del Estado como palanca del desarrollo, el deterioro y representatividad del sistema político y de partidos, el debilitamiento del movimiento sindical y la presencia de graves desequilibrios macroeconómicos que se habían escondido tras masivos flujos de endeudamiento externo.

Como consecuencia de tales factores y la aplicación de una política neoliberal aperturista, durante los años ochenta (1980-89) la tasa de crecimiento del PIB per cápita fue negativa en 0.2% promedio anual. En 1990 se alcanzó un PIB por habitante de \$ 16.783 (a precios de 1975), prácticamente equivalente al del año 1977. En ese sentido puede hablarse efectivamente de una **Década Perdida**, cuyas características y causalidades sintetizaremos en lo que sigue.

### **1. Bajo y decreciente nivel y calidad de vida**

Los indicadores socioeconómicos básicos del Ecuador indican en la

dirección contraria a la deseada por cualquier sociedad que aspire asegurar un crecimiento perdurable y equitativo, en el marco de una democracia plena. En general, los precarios niveles de vida actuales no solo son menores a los vigentes en los años setenta, sino que lo son también en comparación con los promedios de América Latina y el Caribe, ALC.

Luego de los diez años de ajuste neoliberal, como en el resto de países latinoamericanos, los sectores pobres han llevado la mayor parte del peso del ajuste, registrándose índices de pobreza sin precedentes. En efecto, según el Banco Mundial (1990: 68, Anexo 1), el porcentaje de la población ecuatoriana que vive bajo la "línea de la pobreza" sería del 65% (en 1970 abarcaba al 40% de la población, según Barreiros, 1987: 281), bastante mayor al promedio latinoamericano, que alcanza -según la misma fuente- el 54%. Según el PNUD (1992, Tabla XVII), para el período 1980-89, la población total bajo la línea de pobreza sería del 51%, afectando al 65% de la población rural.

El deterioro de las condiciones de vida se manifiesta en todos los aspectos de la satisfacción de las prin-

principales **necesidades básicas**: la nutrición, la salud, la educación, la vivienda y los servicios básicos, como veremos a continuación (entre paréntesis se incluyen las cifras para el promedio latinoamericano).

En **primer lugar, la alimentación** es uno de los derechos fundamentales garantizado por la Constitución del Estado. Sin embargo, observamos que, siguiendo las cifras proporcionadas por el Banco Mundial, el suplemento calórico diario por habitante es de solo 2.058 (inferior en 24% al promedio latinoamericano de 2.700) y que el abastecimiento proteínico por habitante es de 49 gramos por día (69 grs. para ALC), por lo que no sorprende que el 10% de los niños nazcan con bajo peso (algo menos del promedio latinoamericano del 11%). En parte, ello es reflejo del hecho que el índice de producción alimenticia per cápita haya declinado en 4% (de un índice de 100 en el trienio 1979-81 a 95.9 hacia el final de la década).

La desnutrición, en los **niños menores a cinco años**, alcanzó al 55% de la población menor a cinco años (DANS, 1988), frente a un ya elevado 40% en 1976 (Barreiros, 1987). Los resultados son aún más alarmantes cuando se desagregan los

datos para medir la incidencia en el sector **rural y urbano**: El índice de prevalencia de desnutrición crónica, en el estrato popular bajo, para la sierra urbana es 53.4% y para la sierra rural 70.8%, en la costa 48.6% y 50.4% respectivamente. El indicador de la desnutrición es mayor en el sector rural, especialmente en la **sierra**.

La brecha rural-urbana indica que la prevalencia desnutricional rural es casi el doble de la urbana, esta es probablemente mayor en áreas de mayor concentración del ingreso y en las cuales hay un escaso acceso a los servicios públicos. En la sierra, las áreas con índices de desnutrición crónica mayores están en las provincias de Cotopaxi (67.4%), Chimborazo (65.1%), Cañar (64.5%), Imbabura (63.2%), Azuay (60.5%) y Pichincha (52.2%); y, en la costa, Esmeraldas (46.3%) y Manabí (45.8%), según cifras del CONADE-UNICEF-OPS-OMS (pp. 48).

En **segundo lugar**, en el área de la **salud** se observa, de igual manera, las reducidas condiciones de vida en el Ecuador. A juzgar por los datos de los Censos, la mortalidad infantil disminuyó significativamente de 73.4 por cada 1000 nacimientos en 1982, a 30.3 por mil en 1990. Sin embar-

go, al diferenciarla por sector rural y urbano, las diferencias son muy grandes, 22.5 y 39 respectivamente (INEC, Censo 1990: Resumen Nacional, 1992).

En el Ecuador las enfermedades más frecuentes son indicativas del nivel de insalubridad de la población, abundando las enfermedades infecciosas intestinales, respiratorias, y otras derivadas de la utilización de sistemas no formales de salud (atención empírica en partos y abortos).

La **diarrea aguda** afecta a la mayor parte de la población infantil menor a cinco años, la incidencia nacional es de 4.1 veces por año; esta tasa promedio está entre las más altas de los países en desarrollo. Su incidencia es mayor en los estratos populares (4.5 veces), observándose que está en relación directa con las condiciones sanitarias, tales como el tipo de abastecimiento de agua y la eliminación de excretas y de basura (DANS, 1988).

Otro ejemplo es el **cólera**, una enfermedad que está afectando a la población pobre, añadiéndose a la lista de enfermedades infecciosas y respiratorias. Luego de un poco más de un año de su presencia en el país, se han contabilizado más de 50.000

enfermos y más de un millar de fallecidos por esta causa. Se evidencian signos que hacen preveer la endemización del cólera, como son, la mayor incidencia en niños y brotes de curso lento y aparición de casos aislados. Se ha detectado que esta enfermedad se diseminó ampliamente debido al déficit sanitario en el sector rural y urbano-marginal, a lo limitado de las prestaciones médicas, y a la ausencia de prácticas higiénico-preventivas en los sectores mencionados (Solá, 1992).

El Índice de **acceso** a los servicios de salud para 1989 es del 64%, la población con acceso a agua potable es 58%, y la población con acceso a salubridad es 57% (PNUD, 1992).

El sistema de salud pública, debido a la política de restricción del gasto, ha desmejorado sus servicios sensiblemente. Solo como cifras indicativas superficiales se podrían citar: el número de camas por cada mil habitantes pasó de 1.8 en 1980 a 1.6 en 1990; y el porcentaje de ocupación de camas disponibles ha bajado de 58.2% a 57.4%. En el mismo período, el número de días que cada persona permanece hospitalizada ha caído, pero en algunos estudios se ha calculado que esta cifra podría bajar, ya que las personas permanen-

cen mayor tiempo en los hospitales por la demora o falta en la administración de medicinas. Por esta razón el número de días de estadía es menor en las clínicas particulares, 6.3 en el sector público y 3.7 en el privado (Fuente: Estadísticas Hospitalarias, 1990).

Esta situación, por tanto, se relaciona con la disminución del **gasto público en el sector social**, tendencia que está presente en toda la década. Los gastos en salud, como porcentaje del PIB, declinan del 6.7% (1980-81) al 5.6% en 1991; en suces de 1978-9, por habitante, se reducen en 37%, al pasar de \$ 280 en 1980 a \$ 177 en 1991 (datos elaborados a partir del Presupuesto General del Estado, y las estadísticas del INEC).

En **tercera** instancia, es conocido que la **educación** es uno de los derechos de todos los seres humanos y es la mejor 'inversión' que puede hacer un país, porque mejora la productividad de las personas en cualquier campo de trabajo: por otro lado, la educación permite acceder a mayores niveles de ingresos y por tanto incide en su nivelación. Además, algunos estudios han demostrado que los países en desarrollo obtienen mayores tasas de rendimiento en educación que los

países ricos, especialmente en los niveles primarios.

Por tanto, desde el punto de vista social como del económico, el gasto en educación debería ser prioritario. Observamos, sin embargo, que el Gasto en Educación como porcentaje del PIB ha ido declinando paulatinamente de 5% en 1980 a 3.2% en 1988 (Fuente: CEIS-UNICEF, 1991). Ese gasto, como porcentaje del presupuesto, declina del 29.9% en 1980 a algo menos del 18% en el trienio 1989-91. El gasto real por habitante cae en 52%, al reducirse de 1480 suces en 1980 a 717 suces en 1990.

Las tasas de analfabetismo registran una constante disminución, de acuerdo a la información registrada por los censos desde 1950, habiendo declinado de 14.8% en 1982 a 10.2% en 1990. Sin embargo, esta tasa es aun alta. A su interior se esconden grandes diferencias entre el sector rural y el urbano, donde representan 17.4% y 4.9%, respectivamente. La disminución del analfabetismo es mayor en la década del setenta (1974-1982), en que declinó en 37.6%, que en la década del ajuste (1982-1990), en la que se redujo en 31.1%. Sin embargo, constituye uno de los logros en cuanto a educación.

Los problemas educativos cruciales del Ecuador no dan, sin embargo, a nivel de cobertura en alfabetización, sino que se presentan especialmente al evaluar las condiciones cualitativas del sistema educativo formal. Las evaluaciones del grado de aprendizaje reflejan altas deficiencias en los estudiantes a todo nivel. Así, alrededor del 50% de estudiantes de las escuelas públicas tienen deficiencias en el aprendizaje del lenguaje y el 50% de estudiantes de las escuelas públicas urbanas tienen deficiencia en matemáticas; mientras, en el sector rural, los datos indicarían una pequeña mejoría (Banco Mundial, Anexo 3, 1992).

En el mismo informe se señala que las deficiencias estarían en los bajos niveles de preparación y de metodología para la enseñanza de los profesores y en la falta de el material necesario en especial de libros, para el trabajo y capacitación del profesor y para el alumno. Por tanto, concluyen que hay un buen capital humano que necesita urgentemente de mayor nivel académico y metodológico en los profesores.

Sin embargo, los efectos del ajuste también se sienten en la educación. Según los datos que aparecen en el censo de 1990, a nivel nacional, casi

2 de cada 5 personas de 6 años y más asisten a algún centro de educación formal, pero el peso relativo de la población que estudia es menor al de 1982. Este fenómeno se manifiesta tanto en el sector rural como en el urbano; solamente en el grupo de niños entre 6 y 9 años hay un crecimiento sustancial, pero con una gran diferencia entre el sector rural y el urbano. La asistencia a los establecimientos de enseñanza regular ha declinado del 37.5% en 1982 al 34.9% en 1990, cayendo de 41.1% al 38.3% en las urbes y de 32.9% al 30.5% en las zonas rurales. La disminución en la asistencia a clases es mayor en los grupos de personas de más de quince años (hasta los 19 años), especialmente en el sector rural donde los porcentajes son casi la mitad (32.1%) de los que se registran en el área urbana (63.3%). Los altos y crecientes grados de repitencia, sobre todo en los primeros años, son otro indicador del efecto del ajuste sobre el nivel de vida de la población, más marcada entre los pobres y, entre estos, en las zonas rurales.

Las razones para la disminución de asistencia a clases pueden fácilmente relacionarse con la reducción de los ingresos reales de la población, y con la priorización del gasto en función

de las erogaciones prioritarias para la sobrevivencia de la familia, y no para el mejoramiento social y/o económico de sus miembros.

En **cuarto** lugar, de manera similar, si se revisa los indicadores que dan cuenta de la satisfacción de las **necesidades de vivienda** y de **infraestructura básica**, se advierte el descenso del bienestar de la población ecuatoriana luego de esta primera década de ajuste ortodoxo.

El Estado reconoce que la vivienda es un derecho básico de la familia, de la satisfacción de esta necesidad vital depende la salud de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo. La satisfacción depende no solamente del acceso a un lugar donde vivir sino de sus condiciones materiales.

Según datos de los Censos, el número de viviendas ha evolucionado de 1'844.894 en 1982 a 2'339.281 en 1990, es decir a una tasa anual del 3%, algo superior al crecimiento demográfico. Sin embargo, según los datos del CONADE, el déficit de viviendas habría aumentado de 683 mil en 1980 a 980 mil en 1988.

Por otro lado, al evaluar los datos censales acerca de la disponibilidad

de **servicios básicos** se comprueba que una gran proporción de la población vive en condiciones críticas, a pesar de la relativa mejora alcanzada durante los años ochenta.

El **abastecimiento de agua** está a disposición del 62.7% de viviendas en 1990 y en 1982 este indicador fue de 51.8%. Si bien es un avance, sin embargo, indica el aun muy elevado nivel de carencia que existe y, todavía más, que a su interior existen diferencias muy importantes, ya que grandes ciudades como Guayaquil, debido al crecimiento de la población (el crecimiento anual de esta ciudad asciende al 4%!), tiene índices que no alcanzan la media nacional.

La disponibilidad de **servicio higiénico**, pasó de un 59% al 82% de las viviendas en el periodo intercensal. Sin embargo, el problema persiste debido a que casi el 50% no dispone de servicio de uso exclusivo. En añadidura, más de la tercera parte de las viviendas urbanas no tiene acceso al sistema público de **eliminación de aguas servidas**, en tanto que en el sector rural este indicador es el 50% de las viviendas.

Todos los servicios tienen una cobertura menor en el sector rural y es

un factor adicional que explica la persistente migración del campo a la ciudad. Al respecto debe tenerse presente que el crecimiento poblacional promedio de las urbes se procesa a un ritmo explosivo del 3.8% anual, mientras que las zonas rurales lo hacen en 0.8% por año.

Todos estos aspectos sobre el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas, han configurado una imagen apenas referencial de las deficientes condiciones de vida en las que se encuentra una gran parte de la población ecuatoriana. A ello habría que añadir indicadores -que aun no existen en el país- en torno a la delincuencia, la mendicidad, los suicidios, la prostitución, el tráfico y el consumo de drogas, la corrupción, la anomia, etc., para tener un panorama más completo del deterioro económico, social y moral que atraviesa la sociedad en su conjunto.

Esta situación de pobreza extrema y miseria se ha agravado en la última década, lo que dificulta las posibilidades de las personas y sujetos sociales, el acceso a un empleo estable y adecuadamente remunerado, a la participación política lúcida y consciente, a una formación cultural integral, a la acción solidaria, y que en definitiva inhiben las potencialidades

de desarrollo humano y social. Esta exclusión social está llevando a la extinción de las fuerzas impulsoras de una sociedad para el logro del desarrollo común: el potencial creativo y la participación constructiva de la mayoría de la población.

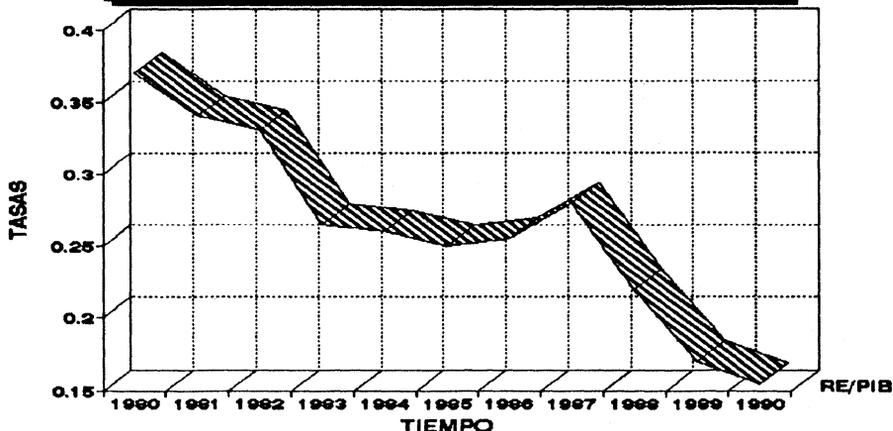
## **2. Compresión del Mercado interno y regresión de las fuerzas productivas**

Es innegable que las condiciones de pobreza, las pésimas condiciones de vida referidas anteriormente, se derivan de los bajos niveles de ingreso real por habitante y de la concentración en la distribución del ingreso y la riqueza.

En los diferentes programas ortodoxos de estabilización aplicados, se procesó una política de represión salarial, en la que los incrementos del salario nominal no compensaron la inflación, con lo que el **salario real** ha disminuido en la mayor parte del período 1980-90. En efecto, el salario mínimo vital real (a precios de 1975) declinó de \$ 2.288 en 1980 a 713 en 1991, lo que representa un descenso del 69% (Acosta, 1992).

Por su parte, la participación de las remuneraciones en el PIB ha sufrido un constante deterioro, disminuyendo

### REMUNERACIONES COMO PARTE DEL PIB (Tasa de Participación)



dramáticamente de 36% en 1980 a 14.7% en 1989 e incluso a 10.8% en 1991, caso único en ALC.

Ambos procesos revelan, indudablemente, los costos sociales muy elevados, inherentes al ajuste ortodoxo, que en algunos momentos han llevado a conflictos sociales de significación.

En efecto, entre 1981 y 1988 el número promedio anual de huelgas ascendió a 1.040, aumentado a 1.700 en el trienio 1989-91.

Se observa un elemento muy claro en la distribución del ingreso. No todos los sectores están en capacidad de defender su participación, en especial los rentistas, informales, campesinos y obreros. Uno de los sectores que sí lo ha logrado con creces es el sector empresarial, a través de un ajuste paulatino de su margen de ganancia sobre los costos o mark-up. Inclusive en algunos años el mark-up ha sido un instrumento que compensó las pérdidas que se derivaron de la disminución de las ventas, causada por la recesión y la

contracción de la demanda. El valor estimado del mark-up para cada año de la década anterior muestra una tendencia creciente, pasando de 34% en 1980, a 87% en 1985 y a 130% en 1990 (Fuente: Rodas, 1992), a medida que aumentaba la capacidad ociosa de producción. Resultados similares se pueden inferir al analizar las tasas de ganancia estimadas, éstas se mantienen e inclusive logran crecer, pasando de 43% en 1980 a 47% en 1990. Si bien en algunos períodos hay un descenso, por ejemplo en 1982, pero posteriormente se recupera.

La concentración del ingreso personal puede evaluarse al observar la distribución de la población ocupada por tramos de ingresos. Más de la mitad (52.6%) de la población ocupada recibe ingresos mensuales menores a los 80.000 sucres (equivalentes entonces a US\$ 92) y únicamente el 2.5% tiene ingresos superiores a los 320.000 sucres mensuales (US\$ 365), según la Encuesta Permanente de Hogares del INEM para 1990.

En esas condiciones, de bajos niveles de ingreso y de mínima acumulación de activos por parte de la mayor parte de la población, paralelamente con una distribución del in-

greso y la riqueza inequitativas y concentradas, el mercado interno, evidentemente, no es masivo y más bien se ha recortado en los dos últimos lustros. Pero ello no se debe solo a la reducida población del Ecuador -9.7 millones de personas en 1990-, sino a la imposibilidad de la gran mayoría de esa población de acceder a niveles mínimos de consumo, tanto por el reducido ingreso con el que cuentan, como por la oferta de bienes y servicios disponible, con bienes y servicios inadecuados a las preferencias y posibilidades de los estratos bajos. En esas condiciones, por su parte, el mercado interno estrecho, segmentado e inestable, limita y a la vez es limitado por el desarrollo de las fuerzas productivas en el país.

Luego de la revisión anterior, muy rápida, de la situación del nivel de vida de la población ecuatoriana, es interesante observar variables más generales que permiten explicar esos precarios niveles de supervivencia, y que -a nuestro entender- **se derivan del patrón de acumulación, agravados por la coyuntura de los años ochenta:**

- Las tasas de crecimiento de PIB (2.13%), fueron insuficientes,

respecto al crecimiento de la población (2.19%);

- Los problemas del desempleo y subempleo, presentes ya antes de la crisis, se acentuaron a tal grado que los niveles de desempleo abierto (que aumentó del 5.7% en 1980 a 14.7% en 1989, según Hopenhayn y Borja, 1991: Cuadro No. 7) y de subempleo (en que los estimados oscilan entre el 46% y el 54% para 1990) no permiten el crecimiento sostenido de la producción, la productividad y, consecuentemente, del ingreso;

- Los bajos niveles de remuneraciones y la constante pérdida de su valor real, como hemos visto, llevó el salario real a la cuarta parte del recibido a inicios de la década, al comprimirse de 3.250 a 1.061 sucres mensuales desde 1980 a 1990; mientras, la tasa de crecimiento anual de los ingresos reales de los trabajadores pasó de 3.3% en la década de los setenta a -1.3% en los ochenta.

- Como se mencionó anteriormente, la desigual distribución del ingreso no tiene similar en ALC, ya que las remuneraciones apenas absorben un poco más del 10% del PIB.

- La inflación, que se estabilizó alrededor del 50%, siendo uno de los peores problemas para la economía y, especialmente, para los sectores mayoritarios pobres que no han desarrollado mecanismos eficaces de defensa (y que, por tanto, pagan parte importante del 'impuesto inflacionario', que oscila en torno al 3% del PIB).

Todo esto, ha derivado en una **decreciente productividad** del trabajo, de la tierra, y del capital, configurando un débil desarrollo de las fuerzas productivas. Paradójicamente se subutiliza, tanto la abundante fuerza de trabajo, como el escaso capital instalado.

Lo que, a su vez, está condicionado por las tendencias y la dinámica de la **inversión**, que -además de haber caído sustancialmente de 23.6% del PIB en 1980 a 14.7% en 1989- no ha sido canalizada equitativamente entre los diferentes sectores de la economía, de forma que el capital productivo es subutilizado en algunos, lo que eleva los costos fijos, y es sobreutilizado en otros, sobre todo en la agricultura, con lo que la productividad del trabajo es demasiado baja.

En la distribución del empleo entre los sectores de la economía se advierte un cambio importante. En veinticinco años -desde 1965 a 1989- la industria casi no ha incrementado su porcentaje de participación en cuanto a ocupación de la fuerza laboral (19 a 19.8%), mientras se manifiesta un tránsito desde la agricultura (cuya participación decrece del 55 al 38.5%) al sector de servicios (26 a 41.6%). Este es uno de los indicadores de la incapacidad de la industria para absorber la oferta laboral, y permite establecer una referencia sobre el carácter del modelo de desarrollo basado en la industria, intensiva en el uso de capital y con capacidad productiva ociosa, que desemboca en una terciarización del empleo.

En resumen, las pésimas condiciones de vida de la mayor parte de la población ecuatoriana, se deben al patrón de acumulación de la economía, las que -en los ochenta- se han agravado por la coyuntura de crisis. Esto a su vez está condicionado por el débil desarrollo de las fuerzas productivas. Como resultado, la existencia de un mercado interno estrecho segmentado e inestable, que permite -y a la vez es sofocado por- el desigual desarrollo de las fuerzas productivas, convirtiéndose en un

círculo vicioso, que necesariamente debe ser superado para mejorar las condiciones de vida de la población.

Por otra parte, esos dos obstáculos pueden ser atribuidos a:

la sobrecapitalización de los segmentos “modernos” y la subcapitalización de los “tradicionales”; los patrones de ahorro y consumo distorsionados; la falta de integración intersectorial en los procesos económicos; el desequilibrio en el desarrollo regional; al aparato estatal ineficiente; y a la creciente dependencia externa, en términos de tecnología, financiamiento (deuda externa), equipo y maquinaria, etc.

En conclusión, todo lo anterior lleva a establecer condicionantes de carácter estructural, que estarían detrás de la situación económica y social actual descrita arriba.

Tales condicionantes estructurales pueden expresarse en términos económicos y políticos: Un **aparato productivo** segmentado de desarrollo desigual, combinado y concentrador y un sistema de poder y del Estado excluyente. Hasta que éstos no se modifiquen no podrán darse los primeros pasos hacia el Desarrollo en el país.

Por tanto, para cambiar el patrón de acumulación y elevar las condiciones de vida de la sociedad ecuatoriana, las reformas deben concentrarse en estos dos aspectos determinantes, que permitieran generar las condiciones para ampliar y uniformar el mercado interno y para desarrollar, descentralizar y homogeneizar el desarrollo de las fuerzas productivas en el país, a efectos de gestar un círculo virtuoso que favorecería la

marcha hacia una sociedad más humana y justa.

Frente a la arremetida del Neoliberalismo en boga, ello obliga a plantear esquemas alternativos de política económica y de acumulación con redistribución, desafío que no podemos escabullir a lo largo de la presente década si queremos avizorar y construir un futuro promisorio para el Ecuador en el siglo XXI.

## **BIBLIOGRAFIA**

*(Fuentes de los Datos presentados)*

Acosta, Alberto, *Pobreza y Política Social en el Contexto del Ajuste*, Quito, noviembre 1992.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, *Cuentas Nacionales*, No. 14, 1991.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, *Memoria*, 1990.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, *Anuario Estadístico 1990*.

BANCO MUNDIAL, *Ecuador: Estrategia del Sector Social para los Noventa*, Reporte No. 8935-EC, noviembre 1990.

BANCO MUNDIAL, *Indicadores Sociales en el Ecuador*, 1992.

Barreiros, Lidia, "El perfil de desarrollo y el comportamiento de las necesidades básicas en el Ecuador" en: *ECUADOR: Teoría y Diseño de Políticas para la sa-*

*tisfacción de las necesidades básicas”*, OIT-ISS, cap. 9, 1987.

*CEIS-UNICEF, Ecuador: Crisis, Ajuste y Política Social en la década del 80, 1991.*

*CONADE-MSP, DANS - Diagnóstico de la situación alimentaria, nutricional, y de salud de la población ecuatoriana menor de cinco años, 1988.*

*CONADE-UNICEF-OPS-OMS, Desnutrición y condiciones socioeconómicas en el Ecuador, 1992.*

*Hopenhayn, Martin y Diego Borja, Bases Fundamentales para una Estrategia de Desarrollo Social Integrado, Quito, CONADE-PNUD-UNESCO-UNICEF, 1991.*

*INEC, Censo de Población y Vivienda de 1990.*

*, Índice de Precios al Consumidor en el área urbana, varios números.*

*, Estadísticas Hospitalarias, 1990.*

*INEM, Encuesta Permanente de Hogares, 1989-1990.*

*Marchán, Cornelio, Ecuador - Crisis, Ajuste y Política Social en los años 80, Quito, ESQUEL-UNICEF, 1992.*

*PNUD, Desarrollo Humano: Informe, 1991 y 1992.*

*Schuldt, Jurgen y Cornelio Marchán, Elementos para una Estrategia de Desarrollo Industrial de Largo Plazo, en: ECUADOR SIGLO XXI Estrategia de desarrollo, GTZ-CONADE, 1992.*

*Soldá, José, “La situación de Salud en el país” en El Cólera: Una respuesta desde la Comunidad Andina, CAAP-CELCO, PP. 36-40, 1992.*

*Rodas, Sonia, La Inflación y la Formación de Precios: Un enfoque alternativo, Trabajo de Maestría en Economía, Quito, FLACSO, mimeo, 1992.*

*Vos, Rob, Ecuador, Teoría y Diseño de Políticas para la satisfacción de las necesidades básicas, OIT-ISS, Quito, 1987.*